

Instituciones agrarias de la tenencia de la tierra, marcos de conflicto e identidades comunitarias: el caso del sur indígena de México¹

Todd A. Eisenstadt

A MENUDO SE achaca a los vividores (*free riders*) el precipitar movimientos sociales y otras expresiones de acción colectiva que no logran realizar su potencial de instituir cambios sociales. Muchos de los seguidores sencillamente no comparten el celo de sus dirigentes y permanecen al margen, al tiempo que cosechan beneficios públicos indivisibles. Tal fue el caso de los zapatistas del sur de México, a quienes se les ha representado en gran parte de lo que se ha escrito como campesinos indígenas que quieren organizarse, manifestarse, e incluso correr el riesgo de encuentros violentos con opresores líderes rurales en la lucha por una mayor autonomía respecto del estado para los ciudadanos indígenas (Díaz Polanco, 2003; Hernández Castillo, 2002; Stephen, 2002). Sin embargo, desde la rebelión zapatista de 1994 en Chiapas, poco se ha sabido de este considerable número de callados ciudadanos indígenas, quizá miembros latentes del grupo, que constituyen la mayor parte de los pobladores rurales de Chiapas. De hecho, su silencio contradice las afirmaciones de los zapatistas de haber aprovechado y organizado una gran solidaridad indígena mediante el desarrollo de vínculos comunitarios primordiales.

Una encuesta realizada en 2002 y 2003 en seis lenguas indígenas y en español retrata actitudes mucho más instrumentales en el México rural. Quizá esto no sea una sorpresa para la generación contemporánea de investigadores de los conflictos sociales que vienen de la tradición de la elección racional

¹ El autor agradece a Michael Danielson, María Inclán, Shannan Mattiace, Viridiana Ríos Contreras, Brian Schaffner y Donna Lee Van Cott sus constructivos comentarios a este artículo y asume la responsabilidad de cualquier error.

(Chandra, 2004; Fearon y Laitin, 2003; Hardin, 1995; Lichbach, 1994). No obstante, esta visión, en la que ciudadanos toman decisiones individuales acerca de cuándo poner el acento en las identidades indígenas y cuándo en las campesinas, no concuerda con las afirmaciones fundamentales de la antropología y los estudios más colectivistas de los movimientos sociales (Escárzaga y Gutiérrez, 2005; Geertz, 1973; Jackson y Warren, 2005). Y el resultado que indica que la forma que tengan las instituciones agrarias es un importante correlato de las actitudes comunitaristas sugiere que el estudio comparativo de las instituciones debería extenderse de las legislaturas y juzgados al campo.

Este artículo se cuenta entre los primeros que afirman —con validación empírica proveniente de un análisis de encuestas a nivel individual— que los factores externos (en este caso las añejas instituciones rurales corporativas creadas por el estado) pueden tener una mayor influencia en la formación de actitudes que las identidades étnicas o culturales endógenas (nuevas teorías de los movimientos sociales) o la organización y estructura del movimiento (teorías de la movilización de recursos). Mi intención es reconsiderar la falta de contexto de que adolecen los estudios de los movimientos sociales del Chiapas finisecular, los cuales tienden a exagerar el papel de los líderes y sus ideas conforme a la certera crítica de Zald (1996: 262-263): “Los elementos centrales de las creencias de los movimientos pueden figurar de manera más prominente en detrimento de la situación y las condiciones sinceras en las cuales se desarrolló el dirigente del movimiento, pero una suerte de determinismo o realismo epistémico [guía] el análisis”. Siguiendo a Zald, afirmo que es posible reconceptualizar la teoría de los movimientos sociales como una interacción entre dinámicas internas y contextos externos (Whittier, 2002: 293). Una vez que demuestro que los patrones de tenencia de la tierra, más que las identidades indígenas, fue lo que dio forma a las actitudes individuales con respecto a los derechos comunales e individuales, argumento de manera preliminar que la llegada del estado mexicano en el siglo XX a Chiapas creó diferencias en los sistemas de tenencia de la tierra y condicionó las perspectivas de los pueblos, aunque esta afirmación está sujeta a una verificación empírica posterior.

Además de medir si los ciudadanos indígenas de Chiapas eran o no devotos seguidores de los zapatistas en un momento particular ubicado entre 2002 y 2003, este artículo plantea preguntas más amplias acerca de las relaciones entre los marcos comunitaristas de los líderes de los movimientos, sus seguidores que se apropian instrumentalmente de estos marcos, los miembros latentes del movimiento y los mudos espectadores de los márgenes, cuyas visiones u opiniones los líderes de muchos movimientos sociales dan por

hecho que representan. Una vez establecida esta relación causal, muestro cómo los campesinos de Chiapas provocaron la repartición de tierras más extensa en México desde los años cuarenta bajo la fachada del zapatismo y, aun más recientemente, cómo han utilizado la amenazadora imagen del zapatismo para obtener servicios públicos, si bien sus reclamos no tienen relación con la identidad indígena. Los habitantes de Chiapas han adquirido una poderosa voz a través de los zapatistas, pero en general sin adoptar las posturas anti-estado y pro-indigenistas de los zapatistas. Más bien, quienes viven en el estado de Chiapas se engancharon al movimiento para subsanar la históricamente desigual repartición de tierras mediante agencias gubernamentales del estado y de la federación. Los resultados son relevantes para otros movimientos indígenas de base amplia, como el poderoso movimiento de Evo Morales en Bolivia, donde los campesinos cocaleros han podido alzar su voz mucho más desde que se reenmarcaron como el movimiento por los derechos indígenas más dinámico de Sudamérica.

Mostraré que los zapatistas y otros líderes de movimientos indígenas en México —y quizá en otras latitudes— afirman que 1) una cosmovisión comunitarista es la que predomina entre sus bases de apoyo, y que por ello en cualquier momento se pueden unir, movilizar y representar bajo una bandera única, y que 2) los zapatistas y los líderes de grupos aliados son los intérpretes naturales y “cuidadores” de este marco cultural comunitario.² Sin embargo, los indígenas que participaron en la encuesta articularon sin lugar a dudas valores sociales basados en las mismas orientaciones ancladas en derechos individuales que los participantes no indígenas, cuando se les preguntó directamente sobre esto en una encuesta rigurosamente controlada, lo cual desmiente las dos afirmaciones anteriores. Dicho de otro modo, las 2 186 personas indígenas encuestadas mostraron la misma tendencia que las 3 194 personas no indígenas a verse a sí mismas como individuos que se apoyan en sus propias fuerzas y debilidades, y no tanto como miembros de una colectividad cuya visión fácilmente puede ser caracterizada y representada por

² Los académicos que estudian las estructuras de oportunidad política que facilitan la acción colectiva (véase cómo Inclán (2006) se basa en McAdam *et al.* (1996)) tienen que aceptar, como punto de partida, que los líderes manipulan (o enmarcan [en inglés *frame*, que tiene el sentido de formular en palabras, enmarcar (en sentido recto y figurado) y también engañar, nota del trad.]) sus mensajes y aprovechan los momentos políticos según exigencias estratégicas y tácticas, así como basándose en la ideología del “movimiento puro”— para estimular a sus seguidores a actuar. Tanto los seguidores como los espectadores de los márgenes con frecuencia cuentan con estos marcos para modificar sus actitudes (McCammon, 2001; Cress y Snow, 2000). Se menciona esto con el fin de matizar estos resultados, los cuales representan un solo momento, contingente y rigurosamente delimitado, en un contexto empírico, pero que merecen reflexiones y aplicaciones ulteriores.

los líderes del movimiento. Además, las posturas de los individuos en un continuo individualista-comunitarista estuvieron determinadas más por factores estructurales como los patrones de tenencia de la tierra y de pobreza más que por la etnicidad (la cual se determinó mediante la pregunta de si el encuestado hablaba una lengua indígena).

Los resultados empíricos apoyan argumentos teóricos enfocados en afinar el conocimiento de las causas de los cambios de identidad constructivistas. Posner (2003), Trejo (2004) y Laitin (1985) han relacionado formalmente las instituciones políticas que defienden tanto las lenguas como las prácticas religiosas con la construcción de identidad, pero hasta ahora, es poco el trabajo empírico que ha puesto en relación las instituciones de tenencia de la tierra con la construcción de identidad étnica. Este artículo muestra, mediante pruebas estadísticas aplicadas a los patrones de preferencias de los encuestados en cuanto a los derechos individuales en oposición a los comunitarios, que hay factores *aparte de* la identidad étnica que tienen efectos más importantes sobre si los encuestados favorecen más actitudes que enfatizan los derechos comunitarios o las que enfatizan derechos individuales.

Este artículo, que ofrece la primera verificación empírica, a nivel individual, de la versión convencional que se relata acerca de la penetración del corporativismo en el ámbito rural mexicano durante el siglo XX, pero que se abandonó cuando la rebelión zapatista cambió el acento puesto en los argumentos estructurales a los culturales, establece una diferencia entre los derechos individuales y los comunitarios en la próxima sección e ilustra estas distinciones con evidencias tomadas de estudios de caso en dos estados del sur de México, Chiapas y Oaxaca. En seguida, se esbozan los procesos históricos que caracterizan los patrones de tenencia de la tierra en cada estado. Se describe la variable dependiente y su construcción y las tres hipótesis operacionalizadas por las variables independientes. Se discuten los resultados de tres modelos Probit, y se presenta una sección que desarrolla más cómo los resultados se relacionan con los patrones históricos de tenencia de la tierra que se observaron y su importancia, para finalmente ofrecer las conclusiones.

Derechos individuales *versus* derechos comunitarios en Chiapas y Oaxaca

Para muchos autores de la tradición comunitarista (Jackson y Warren, 2005; Escárzaga y Gutiérrez, 2005), los derechos indígenas son derechos comunitarios por definición. Para los comunitaristas, la política, más que una agluti-

nación de preferencias individuales (como para los individualistas liberales), surge de las preferencias articuladas por grupos que se presume representan más que la suma de sus partes. Los grupos económicos, las minorías políticas, religiosas y étnicas, y otras que se considera forman parte de clivajes que influyen en la participación política, poseen derechos que sobrepasan los de los individuos tomados aisladamente. Los derechos sociales, es decir, “toda la gama desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad hasta el derecho a participar plenamente del patrimonio social y vivir la vida de un ser civilizado de acuerdo con los estándares vigentes en la sociedad” (Marshall, 1973: 72), son derechos ciudadanos comunitarios.

El comunitarismo zapatista quizá encuentra su mejor expresión en la declaración de autonomía del Foro Indígena Nacional de 1996:

Levantamos esa bandera [la de la autonomía] para hacer saber a otros que seguimos existiendo como lo que siempre hemos sido: pueblos dignos, que se saben diferentes a otros y se hermanan entre sí, por ser todos indígenas. Somos pueblos, no etnias o poblaciones; al reconocernos como tales, con los derechos colectivos que nos corresponden por nuestra diferencia (...). (Foro Nacional Indígena, 1996: 30)

Si bien esta bandera apenas puede ser más comunitarista, incluso los zapatistas reconocieron la necesidad, aunque supeditada a los derechos colectivos, de reconocimiento de los derechos individuales. Para los zapatistas del Foro Nacional Indígena, los derechos individuales y colectivos no eran iguales en la misma medida. Como lo señala Hardin (1995), pero sólo pocos teóricos de la política, esta conceptualización de la relación entre lo individual y lo comunitario se diferenciaba de la de la mayor parte de los especialistas occidentales en derechos ciudadanos que se separaron de la tradición de la Ilustración europea. Para 2003, los usos individuales de los símbolos del zapatismo se habían convertido en elementos normales del repertorio de contención de muchos ciudadanos rurales (Tarrow, 1998: 20).³ Estos ciudadanos enmarcaron el movimiento como una oportunidad política de conseguir servicios sociales que de otra manera estaban fuera de su alcance.

La necesidad de encontrar dos estados indígenas para tomar la muestra condujo a Chiapas y Oaxaca no sólo porque se cuentan entre las poblaciones “más indígenas” de México, sino también por sus historias distintas en cuanto

³Tarrow afirma que “los movimientos sociales son repositorios de conocimiento de rutinas particulares en la historia de una sociedad, los cuales ayudan a tales movimientos a superar los déficits de recursos y comunicación que padecen típicamente los pobres (...)” (Tarrow, 1998: 20).

a la penetración del estado en las comunidades tradicionales. Chiapas se distingue por una identidad comunal indígena fuerte, por la polarización social, por un añejo conflicto entre el estado y la sociedad, por una población fuereña de terratenientes dueños de grandes extensiones de tierra que han hecho a un lado a las comunidades indígenas desde la época colonial (Collier y Lowery Quaratiello, 2005; Harvey, 1998). El levantamiento zapatista puso en el mapa nacional una serie de condiciones que culminaron en la aprobación histórica en 2002 de una reforma constitucional que les daba a los pueblos indígenas de México una autonomía parcial. La reforma fue ratificada, pero en gran medida sigue sin aplicarse.

La opinión pública de Chiapas (28.5% de su población es indígena según el criterio lingüístico), se contrasta con la de Oaxaca, otro de los estados mexicanos predominantemente rurales (47.9% de población indígena) y la de Zacatecas (0.3% de población indígena), un estado rural empobrecido del centro de México que se usa como variable “de control”. Con esto construyo tres grupos (*clusters*) de variables latentes para recabar las variables de actitudes de las preguntas del cuestionario de la encuesta.⁴ Los encuestados indígenas también formaron la mayor parte de la muestra (seleccionados según el criterio lingüístico, para lo cual los datos censales fueron la guía para seleccionar dónde tomar las muestras de acuerdo con lugares donde se concentran ciudadanos indígenas), pero fuera de esto los municipios se eligieron aleatoriamente, así como las AGEB, las localidades, hogares y encuestados (pero la tasa de sustitución alcanzó alrededor de 20% en cuanto a localidades, hogares y encuestados).⁵

⁴ La encuesta fue diseñada por el autor, Araceli Burguete del CIESAS-Sureste y María Cristina Velázquez, adscrita al CIESAS-Istmo, y se llevó a cabo en español y en seis lenguas indígenas, entre junio de 2002 y febrero de 2003. El autor diseñó la técnica para la toma de muestras, cuyo objetivo fue identificar una muestra representativa de encuestados mayores de 18 años de edad tomada de por lo menos tres Áreas Geostatísticas Básicas (AGEB) urbanas o también de comunidades rurales o localidades por municipio en de 22 a 30 municipios en Chiapas, Oaxaca y Zacatecas. Burguete, Velázquez y Francisco Muro de la Universidad Autónoma de Zacatecas capacitaron a los encuestadores, la mayor parte de los cuales eran estudiantes universitarios bilingües (español y lengua indígena). La encuesta sobrerrepresentó a los indígenas tomando 50% de la muestra en comunidades mayoritariamente indígenas y 50% en comunidades no mayoritariamente indígenas de Chiapas y Oaxaca, pero generó otros estratos aleatoriamente (AGEB, manzanas, hogares en municipios de más de 4000 habitantes, y localidades y listas de pobladores en localidades de menos de 4000 habitantes, para las que no se han definido las AGEB) con base en información sobre población del año 2000 (véase INEGI, 2001a; 2001b; 2002). Fue necesario sustituir ciertos municipios y localidades por otros.

⁵ El margen de error global es menos de $\pm 2\%$, aunque puede ser mayor dentro de categorías particulares de preguntas. Este margen de error es válido para un intervalo de confianza de 95%.

Es sabido que Oaxaca ha mostrado un desarrollo que respeta la autonomía indígena (Díaz Montes, 1992: 101-103), pero también es presa de intensos conflictos intra-comunitarios, en especial en las áreas indígenas (Dennis, 1987; Greenberg, 1989). A guisa de reafirmar la supuesta armonía entre el gobierno del estado y las localidades indígenas, en 1995 las autoridades estatales aprobaron las leyes de usos y costumbres para la elección de autoridades locales (Eisenstadt, 2007). En Oaxaca las relaciones entre los ciudadanos indígenas y los no indígenas están menos polarizadas y movilizan a menos población que en Chiapas, donde la polarización y la movilización es más intensa.

A diferencia de Chiapas, que ha sufrido una extensa degradación ambiental, enfrentamientos entre clases sociales y violencia de las élites hacia otros grupos, y agresivas violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades (De Vos, 2002; Rus, Hernández Castillo y Mattiace, 2003; Mattiace, 2003; Collier y Lowery Quaratiello, 2005), muchos de los conflictos violentos en Oaxaca han sido internos.⁶ La infiltración del corporativismo de estado en las comunidades tradicionales ha sido distinta en Oaxaca y Chiapas, dado que a la población indígena de Oaxaca, tras quedar diezmada por la conquista española, posteriormente se le permitió organizarse en las pequeñas comunidades aisladas que sobreviven hasta hoy en día. Según el historiador Chance (1986: 180), “lo que interesaba más a los españoles era sustituir las estructuras indígenas arriba del nivel comunitario, y en Oaxaca, donde estas estructuras no existían o apenas despuntaban, una proporción importante de la organización sociopolítica indígena sobrevivió la época de la conquista”.

Aunque el gobierno mexicano no logró consolidar completamente el control de Chiapas durante la Revolución, alcanzó a penetrar la extensa economía terrateniente de los hacendados a fines del siglo XX con un trabajo más intenso que en Oaxaca, donde la organización, más igualitaria y autónoma, pero económicamente menos productiva, se formó mediante la creación de tierras comunales poco tiempo después de la conquista española. La escasa penetración en las regiones más apartadas de Chiapas —en el resto de México esta penetración ya era muy extendida en los años cincuenta del siglo pasa-

⁶Las autoridades de derechos humanos dicen que los gobiernos autoritarios del estado han ejercido la violencia en contra de movimientos sociales (como el de los maestros y algunos en favor de ciertos asuntos indígenas) desde los años setenta y ochenta. Gibson (2006) llamó a Oaxaca uno de los bastiones más autoritarios del continente americano, y en 2006, una movilización que duró seis meses paralizó la ciudad de Oaxaca, capital del estado, con un saldo de varios muertos, por una huelga de maestros sindicalizados que creció hasta convertirse en un amplio movimiento de oposición al gobernador, hasta que la policía federal fue enviada para aplastar a los opositores al gobierno.

do, pero en Chiapas se intensificó en los setenta y ochenta— se asociaba al “fracaso” de la Revolución Mexicana en consolidar su control sobre las élites económicas de ese estado, que lograron resistir la política de reparto de tierras del presidente Lázaro Cárdenas de los años treinta, la cual pretendía repartir la tercera parte de las tierras arables del país (Hansen, 1971: 34).

En las tierras altas de Chiapas, el gobierno y el partido oficial (el Partido Revolucionario Institucional, PRI) consolidaron su poder en los años cuarenta, cuando el gobierno del estado decretó que únicamente los funcionarios religiosos tendrían permiso de vender alcohol en las comunidades indígenas, con lo que los ancianos con cargos religiosos obtuvieron un lucrativo monopolio a cambio de ceder poder a los jóvenes maestros bilingües que se convirtieron en nuevos dirigentes políticos, ocupando cargos como presidencias municipales, dando servicios a las comunidades votantes e intercediendo por líderes comunitarios ante el gobierno, gestionando préstamos y fomentando la lealtad al PRI (Rus, 1994). En la aun más remota región de la Selva Lacandona, donde los zapatistas se ocultaron durante años antes de salir a escena, los arreglos corporativistas eran menos específicos, así como la penetración del estado era todavía escasa. Aquí, todavía a principios de los años ochenta, la iglesia católica era el sustento principal de las instituciones políticas. Las guerrillas urbanas que habían fracasado en la ciudad de México, encontraron cobijo bajo la espesura de la selva. Para Trejo (2004), los líderes del movimiento que surgieron de estas instituciones de base religiosa apostaron su capital social en el movimiento indígena de los años noventa, adelantándose a quienes estaban vinculados a la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Variación en el reparto de tierras y las instituciones de tenencia de la tierra

La reforma agraria del siglo pasado en la Sierra Lacandona, así como en Chiapas en general, resultó ser un perro que ladraba mucho. El presidente Lázaro Cárdenas quintuplicó el número de acciones “estatales”, de 70 logradas por sus predecesores a más de 300 entre 1934 y 1940, pero sólo se ejecutaron la mitad aproximadamente durante su mandato (Villafuerte *et al.*, 1999: 349). Sin embargo, los decretos presidenciales con frecuencia repartían las mismas tierras dos o hasta tres veces, lo que hizo que se atrasaran escandalosamente las regularizaciones y titulaciones de tierras repartidas tan generosamente por la institución presidencial. Igual que a principios del siglo XX, el descontento social y un reclamo cada vez más airado a los gobiernos autoritarios del PRI de los años sesenta y setenta motivaron a los presidentes a “repartir”

todavía más tierras, pero sin instrumentar el traslado de propiedad del gobierno a los ejidatarios. Durante esta época, los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría (entre los dos) entregaron sólo 38% de la tierra que prometieron. A fines de los años ochenta, el presidente Salinas hizo esfuerzos por cumplir las promesas de sus antecesores, pero todavía a fines del siglo XX 14% de las hectáreas prometidas de ejidos y tierras comunales seguía sin ser “entregado”, y Chiapas acumulaba por lo menos la cuarta parte de este retraso (Monroy, 1994). Nuevas demandas desembocaron en nuevas titulaciones de tierras en Chiapas después de 1994, pese a que el gobierno ya había concluido el programa de reparto de tierras en 1992, tras 75 años de funcionamiento.

El históricamente pobre reparto de tierras en Chiapas, donde 52.5% de la tierra estaba en manos de 2.4% de los terratenientes todavía en 1960 (Gómez Cruz y Kovic, 1994: 43), no mejoró gran cosa a raíz del fin de la Revolución Mexicana en 1917. Tras décadas en las que “la reforma agraria, al parecer, apenas si llegó a Chiapas” (Benjamin, 1996: 179), se crearon cientos de ejidos nuevos por todo el estado. No obstante, quienes vivían en los ejidos siguieron sumidos en la pobreza obteniendo magros beneficios, mientras que los grandes terratenientes que tenían ganado y producían café, caña de azúcar, cacao y algodón vivieron una “bonanza” gracias a la demanda internacional de estos productos. Los zapatistas y su movimiento comunitario vinieron a llenar este vacío. Las siguientes secciones de este trabajo ofrecen pruebas directas de que si bien los campesinos de Chiapas tienen un carácter comunitario, éste no depende en realidad de sus identidades indígenas.

Construcción de la variable dependiente

Se estudiaron dos conjuntos de actitudes mediante la construcción de tres grupos (*clusters*) de variables latentes utilizando cuatro preguntas (enlistadas en el Cuadro 1), las cuales miden en la persona encuestada hasta qué grado está de acuerdo con una visión individual de la identidad (definida principalmente con relación a sí mismo) o con una visión colectiva de la identidad (o sea, fuertemente influida por las percepciones del grupo). Las otras cuatro preguntas (también mostradas en el Cuadro 1) evaluaron si los encuestados tendían a considerarse individualistas o comunitaristas. Cada encuestado fue clasificado en una categoría bivariante en dos dimensiones construidas a partir de estas ocho preguntas. El objetivo fue comparar posturas indígenas y no indígenas en un modelo bi-dimensional más o menos parecido al que utilizaron Inglehart y Baker (2000), aunque su modelo pretendía diferenciar cosmovisiones occidentales o “modernas” de las “tradicionales”.

Cuadro 1

Descripción de la variable dependiente
Agrupación de los comunitaristas

<i>Pregunta para determinar el grupo</i>	<i>Respuesta comunitarista general</i>	<i>Encuestados indígenas comunitaristas</i>	<i>Encuestados no indígenas comunitaristas</i>	<i>Prueba T de una sola cola</i>
QS 31-El trabajo comunitario obligatorio es <i>ilegal</i>	37.3%	49.6% no está de acuerdo	28.9% no está de acuerdo	56.6
QS 33-Es mejor colaborar en beneficio de este lugar que pagar impuestos al gobierno	56.8%	69.4% está de acuerdo	48.3% está de acuerdo	84.2
QS 36-El gobierno debe estar siempre por encima de las leyes o costumbres de las comunidades indígenas	55.5%	60.9% no está de acuerdo	51.8% no está de acuerdo	81.1
QI 48-La pobreza en México se debe a que las personas no se esfuerzan lo suficiente para salir adelante	38.6%	39.9% no está de acuerdo	37.7% no está de acuerdo	58.2
QS 71-Los pueblos indígenas son los verdaderos cuidadores de las tierras mexicanas	58.4%	72.1% está de acuerdo	49.5% está de acuerdo	100.0
QI 83-La gente es responsable de cumplir las ideas de la comunidad, y no debe ponerlas en duda	60.2%	69.9% está de acuerdo	53.6% está de acuerdo	90.2
QI 85-La identidad de uno mismo como persona es más importante que los grupos a los que uno pertenece	22.6%	24.6% no está de acuerdo	21.2% no está de acuerdo	39.6

<i>Pregunta para determinar el grupo</i>	<i>Respuesta comunitarista general</i>	<i>Encuestados indígenas comunitaristas</i>	<i>Encuestados no indígenas comunitaristas</i>	<i>Prueba T de una sola cola</i>
Q1 95- Es más importante enseñar a los niños a tener conciencia de la historia de su pueblo que tener conciencia de su confianza en sí mismos	43.2%	59.6% está de acuerdo	32.0% está de acuerdo	63.9

Nota: La muestra consiste de 2 186 personas indígenas⁷ y 3 194 personas no indígenas encuestadas (se hizo el análisis completo de los 4 780 casos sin valores omitidos). Para el grupo de variable latente de Latent Gold 3.0, la R² estándar fue de 0.866 con una clasificación log-probabilidad de -39645.17. Ya escaladas, las ocho preguntas alcanzaron un alfa de Cronbach de 0.556. La tasa de no respuesta para cada pregunta en general fue menor a 5%, pero en una pregunta llegó a ser de 24%. Mientras se generó una respuesta según la escala de cinco categorías de Likkert por cada pregunta, las categorías de “está de acuerdo” y “está muy de acuerdo” y las de “no está de acuerdo” y “está en franco desacuerdo” se combinaron en el análisis de datos, pues se encontró que las distinciones resultaban ser demasiado sutiles para algunos encuestados. De ahí que las tres categorías de respuesta para cada variable sean está de acuerdo, no está de acuerdo y el residuo (ni está de acuerdo ni en desacuerdo, no sabe, no responde). Mientras se correlacionaron los resultados “brutos” con el grupo modal comunitario en las dos columnas derechas, las columnas de la izquierda son para respuestas sin clasificar (“*unclustered*”). Los grupos modales fueron como sigue: 63.2% de los casos en general se clasificaron en el grupo individualista, 24.8% en el comunitarista y el 12.0% restante se clasificó en el grupo “no descriptivo” (Cuadro 3) y se eliminó de los modelos subsecuentes.

⁷El único encuestado indígena de Zacatecas fue excluido del Cuadro 1.

Normalmente lo que se dice es que los encuestados indígenas se aglutinan en el grupo modal comunitarista y no en el individualista con más frecuencia que la cohorte de no indígenas, que es lo que se quiso comprobar en el primer nivel de descripción estadística. La premisa de la distinción comunitarista-individualista es que si la cultura se ve como “la estructura de significado mediante la cual la gente da forma a su experiencia” (Geertz, 1973: 312), entonces la opinión acerca de las relaciones entre el individuo y la sociedad, y entre las lealtades comunitarias de un individuo y su pertenencia al grupo son un componente crucial y manejable de la cultura política y socialización de la persona. Las ocho preguntas que se eligieron para ubicar a cada encuestado(a) en el continuo se definieron como una combinación de 20 preguntas elegibles que dan cuenta de los extremos del análisis del grupo más robusto (“grupos modales”), y muestran suficiente varianza en estas variables dependientes categóricas. En el análisis que sigue, los 3017 encuestados en los dos estados que respondieron completamente los cuestionarios y que constituyeron patrones consistentes se clasifican en una de tres categorías mediante la agrupación de variables latentes. Dos grupos modales se registran que contrastan los patrones de respuesta generados por el grupo de ocho preguntas (Cuadro 1), en los cuales se clasificó a cada encuestado. Los encuestados se clasificaron en el grupo que espacialmente estaba “más cerca” de sus posiciones de grupo. Conceptualmente, cada grupo modal representa un tipo ideal. Dos grupos modales se consideran como polos con un continuo de respuestas entre ellos, mientras un tercero —12% de los casos que se descartaron para contra-equilibrar los dos conjuntos mutuamente excluyentes de actitudes— quedó constituido de encuestados con opiniones incompletas, incoherentes o “sin patrón”. Si bien el análisis Probit multinomial se llevó a cabo con el tercer grupo, como no mostró un patrón coherente fue eliminado del análisis que se presenta aquí por razones de parsimonia estadística.

Comprobación de las variables independientes

Una vez establecida una variable dependiente basada en los grupos modales dicotómicos individualista-comunitarista, operacionalicé tres causas posibles que colocan a los encuestados en este “continuo comunitarista”, la primera de las cuales —ya examinada— era “Identidad étnica”. Según el Cuadro 2, como los pueblos indígenas se asocian con actitudes comunitaristas, esta hipótesis es que es más probable que los encuestados no indígenas caigan en el grupo modal individualista.

Cuadro 2

Resumen de las causas hipotéticas de las actitudes individualistas/comunitaristas
(las abreviaturas de las variables se explican en el apéndice)

<i>Hipótesis</i>	<i>Indicadores operacionales</i>	<i>Resumen de resultados</i>
<p><i>Identidad étnica</i> Es más probable que los encuestados indígenas caigan en el grupo modal comunitario</p> <p>Variables: Pct indíg, Leng. encuesta, Indígena, Zapatista de Chiapas</p>	<p>Presencia de muchos ciudadanos lingüísticamente indígenas; aplicación de la encuesta en lengua que no es el español; auto-identidad indígena; si los encuestados son o no son de municipios de influencia zapatista</p>	<p>En medida considerable confirmada en sentido negativo (<i>disconfirmed</i>)</p>
<p><i>Estructura agraria</i> Los encuestados con tierras menos y más comunitariamente estructuradas tienen mayor probabilidad de caer en el grupo modal comunitario</p> <p>Variables: Proporción de ejidos; Cantidad de tierras en propiedad; ¿Trabaja en la agricultura?, Lucha por la tierra en Chiapas</p>	<p>Si las tierras campesinas están en régimen ejidal o comunal; si el encuestado es propietario de suficiente tierra para satisfacer sus necesidades básicas; si el encuestado trabaja en la agricultura; si el municipio ha sufrido prolongados conflictos de tierras (sólo Chiapas)</p>	<p>Firmemente confirmada</p>
<p><i>Capital Social</i> Es más probable que los encuestados que están inmersos en más redes sociales de tejido más cerrado caigan en el grupo modal comunitario</p> <p>Variables: ¿Corporativista?, Gob. tradicional, Oaxaca UC</p>	<p>Si el encuestado participa en grupos corporativistas; si el municipio al que pertenece se rige por usos y costumbres (sólo Oaxaca) o si es bastión zapatista (sólo Chiapas) o si tiene un gobierno paralelo al del estado</p>	<p>Confirmada</p>

Pero además de usar una distinción “indígena/no indígena” bivariante basada en el lenguaje o una distinción construida a partir de si el encuestado se identificaba a sí mismo como indígena (en oposición a mexicano o oaxaqueño/chiapaneco), también se comprobaron otros dos indicadores relacionados. La primera variable adicional dentro de esta hipótesis era un “dummy” para el lenguaje en el cual se había llevado a cabo la encuesta. Los 1 321 encuestados en lenguas indígenas —casi 25% de la muestra (y 60% de los hablantes de lenguas indígenas)⁸— tenían opiniones más comunitaristas que los encuestados en español. En consonancia con Fearon y Laitin (1996), se asumió que los hablantes indígenas monolingües estaban más endogenizados en sus culturas y tradiciones nativas, y menos expuestos a otras perspectivas. Otra variable adicional dentro de esta hipótesis fue el porcentaje general de población en cada comunidad que hablaba por lo menos una lengua indígena. Por último, sólo para el Modelo 1 (Chiapas) se incluyó un dummy para saber si el encuestado vivía en alguna de las 23 comunidades autónomas zapatistas en 1997, asignando 1 para una respuesta positiva y 0 para una negativa (véase el apéndice para una definición más completa de ésta y las demás variables).

Con base en estudios sobre el corporativismo rural mexicano (Reyna y Wienert, 1977; Harvey, 1998; Guillén, 1998), y en otras obras que explícitamente contrastan el desarrollo de la identidad comunal indígena de Chiapas y Oaxaca (León Pasquel, 2001; Rus, 1994; Stephen, 2002), construí una segunda hipótesis, llamada “Estructura agraria”. Con base en el mencionado contraste entre las historias de integración indígena con el estado, mi hipótesis fue que los grupos comunales se unieron en contra del estado en el campo chiapaneco a mediados del siglo XX, pero que este fenómeno avanzó menos en las “cerradas comunidades corporativistas” tradicionales de Oaxaca (Wolf, 1957). Mi argumento es que, en virtud del benigno olvido del gobierno mexicano —al menos un olvido relativo con respecto a Chiapas— de las comunidades indígenas en Oaxaca, y el hecho de que estos ciudadanos no tenían la necesidad de unirse para solicitar tierra ejidal mediante añejas campañas de protesta, en realidad era probable que tuvieran actitudes más individualistas.

⁸ La encuesta fue traducida por lingüistas al cho’l, tzeltal, tzotzil y zoque en la muestra de Chiapas, que es indígena en 28.5% según el criterio lingüístico. En la mitad de los casos, la encuesta se tradujo por escrito, mientras que en el resto se tradujo oralmente, se grabó y fue memorizada por los encuestadores bilingües. Los grupos modales de las variables latentes se construyeron para reunir las variables de actitudes a partir de las respuestas a la encuesta. Los encuestados indígenas fueron sobrerrepresentados, pero aparte de esto los municipios fueron seleccionados aleatoriamente, así como las AGEB, localidades, hogares y encuestados (pero con una tasa de sustitución de entre 10 y 35% en cada caso en cuanto a las localidades, hogares y encuestados). No se ponderó la muestra, pues el objetivo fue comparar dos grupos estudiados y no tanto afirmar una “representatividad” más allá de la muestra.

Lo que esperaba encontrar era que los encuestados indígenas de Oaxaca en particular mostrarían actitudes menos comunitaristas que los ciudadanos indígenas de Chiapas, quienes ya se habían rebelado abiertamente desde hacía unos treinta años en contra de aceptar “negocios” de manera individual con el estado corporativista.

La información censal sobre población y actividad agrícola a nivel municipal fue recogida en cuanto a la estructura de las tierras públicas que predominan en las áreas rurales (ya fuera que se trabajaran mediante cooperativas ejidales o ya sea que hayan sido otorgadas por el estado a las poblaciones indígenas como tierras comunales).⁹ Se prevé que las áreas con alta concentración de ejidatarios tuvieran una orientación *menos* individualista que las áreas con altas concentraciones de comuneros. A nivel individual, se recogió la información acerca de si los encuestados eran propietarios de tierras o si trabajaban en el sector agrícola (diferenciándolo del sector industrial o de servicios) y en el nivel municipal sólo en el modelo de Chiapas (Modelo 1) se codificó un dummy para saber si el encuestado pertenecía a alguno de los 27 municipios donde se hicieron acuerdos sobre tierras para resolver conflictos que beneficiaran a más de 500 personas entre 1994-1998.

La tercera hipótesis, “Capital social” se toma de la definición de Bourdieu de capital social según la cual “la suma de los recursos reales o potenciales que se relacionan con la posesión de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo —o, dicho de otro modo, la pertenencia a un grupo” (Bourdieu, 1986: 248). Esta hipótesis incorpora elementos de capital humano y su agregación al capital social, y se distribuye en cuatro indicadores operacionales. Se esperaba que los dos primeros se asociaran positivamente con los niveles de individualismo del encuestado: mayores grados de globalización,¹⁰ mayores grados de educación formal.¹¹

El último indicador, “Capital social”, quizá el más importante, mide las opiniones del encuestado acerca de si la sociedad civil local se organiza con

⁹Los tres estados estudiados están entre los que tienen las proporciones más altas de tierras públicas. En Chiapas, 49% de la superficie del estado está ocupada por ejidos y tierras comunales (casi 90% son ejidos); en Oaxaca, 77% del estado se divide en estos dos regímenes (divididos casi por igual entre ejidos y tierras comunales), y en Zacatecas, casi 51% de la tierra que no es de propiedad privada está en el régimen ejidal. Véase el apéndice.

¹⁰Se midió la globalización mediante una escala de seis preguntas (alfa = 0.589). Las preguntas de esta escala preguntaban si el encuestado alguna vez: 1) ha vivido en otra comunidad; 2) ha visitado la ciudad de México; 3) ha vivido en otro país; y si sabían qué era 4) el mundial de fútbol; 5) remesas o envíos de dinero; 6) la biodiversidad.

¹¹La educación se codificó como un “dummy”: cero si la encuestada no había terminado la primaria y uno si sí la había terminado.

patrones de gobernabilidad locales en su comunidad. Se basa en una escala que da un punto para cada una de las siguientes respuestas: 1) el mayordomo organiza la fiesta anual de la comunidad; 2) si hay alguna forma de trabajo comunitario “voluntario” (que en Oaxaca se conoce como tequio y en Chiapas como faena); y 3) si es requisito para alguien que quiera ser alcalde haber ocupado cargos inferiores de servicio público voluntario en el escalafón de autoridad. La hipótesis aquí es que las formas más tradicionales de gobierno —que no son sinónimo de identidad étnica¹²— pueden ofrecer a los ciudadanos más opciones para resolver conflictos a través de los canales estatales y/o mediante instituciones paralelas establecidas por las autoridades tradicionales. El gobierno tradicional es un índice compuesto de los tres elementos enumerados anteriormente, que no tienen una correlación fuerte con la identidad indígena,¹³ y estas estructuras, aunque arrojan resultados que apuntan hacia lo comunitario, también parecen indicar niveles más altos de cohesión social/política en una sociedad (lo cual es indicador de actitudes más individualistas). También dentro de esta hipótesis, se midieron otros dos “dummies”: si el encuestado participaba en programas estatales corporativistas y, sólo para el Modelo 2 (Oaxaca), si el encuestado vivía en uno de los 418 municipios de los llamados de “usos y costumbres” (de un total de 570).

Aparte de las doce variables comprobadas como parte de las tres hipótesis enunciadas, también se comprobaron otras nueve variables para control. En primer lugar, se introdujeron varios indicadores operacionales de pobreza relativa y condición socio-económica. El nivel de pobreza de cada encuestado se evaluó relativamente al nivel de pobreza local general, basado en la presencia de tres indicadores de desarrollo económico que también estaban disponibles (como porcentajes generales) para cada comunidad: energía eléctrica, drenaje y gas para cocinar. Un segundo indicador se tomó del registro natural de transformación de la población total de la población de la comunidad, según la premisa de que poblaciones más grandes tenderían a niveles más altos de individualismo. Por último, la tasa de cambio poblacional de las

¹²La correlación entre el índice de gobierno tradicional y las variables de identidad étnica son como sigue: 0.483 para el porcentaje global de la población en cada poblado donde se habla lengua indígena, 0.317 para los que responden la encuesta en una lengua que no sea el español, y 0.438 para la escala tomada de la auto-identificación y/o si el encuestado hablaba alguna lengua indígena.

¹³Incluso en Oaxaca, el estado más indígena de México, sólo hay una correlación de 0.24 entre el gobierno tradicional y el “porcentaje de indígenas” por localidad, y una correlación de 0.17 entre el gobierno tradicional y los encuestados indígenas que se “identifican a sí mismos” como tales. Existe una correlación de 0.73 entre el gobierno tradicional y la apelación de “usos y costumbres”, pero éstos no se relacionan de manera fuerte con la identidad indígena.

localidades de los encuestados entre 1990 y 2000 también se midió, así como una variable “dummy” que medía si la encuestada había migrado alguna vez en los últimos cinco años.

Un conjunto de indicadores operacionales también fue incluido para medir las tendencias hacia el conflicto por diferencias en los grupos: la heterogeneidad étnica, religiosa y política se midió entre las poblaciones de las localidades (agregadas a nivel sub-municipal usando información censal y resultados electorales, pero no a nivel individual; véase el apéndice). Una variable “dummy” para medir el sexo del encuestado también fue incluida, dado que la discriminación en contra de las mujeres en las sociedades indígenas es una acusación frecuente. Una escala para el conflicto de cuatro elementos (alfa = 0.552) se construyó a partir de las respuestas individuales, combinando las respuestas de la encuesta acerca de si el encuestado había tenido experiencia de conflictos religiosos, gobernabilidad municipal, partidos políticos o recursos/cuestiones ambientales. Un indicador de nivel municipal de conflictos post-electorales, un indicador sustituto para medir conflictos sociales y políticos más amplios (Eisenstadt, 2004), también se incluyó, así como si los encuestados habían emigrado de su comunidad alguna vez en los últimos cinco años (18% de los encuestados, aproximadamente).

Discusión de los resultados

Los coeficientes registrados en el Cuadro 3 confirman claramente las hipótesis de “Estructura agraria” y de “Capital social” para los tres modelos, y contradicen que la “Identidad étnica” sea por sí sola una causa importante de las actitudes colectivistas-comunitaristas para todos los modelos excepto el Modelo 1 (Chiapas).

Ninguna de las variables de identidad indígena son estadísticamente significativas en el Modelo 3 (todos los estados; esto incluye a Zacatecas, donde la muestra sólo incluyó un hablante de lengua indígena). Las variables de lengua y porcentaje de indígenas de la encuesta, sin embargo, fueron estadísticamente significativas al nivel de 0.01 en el Modelo 1 (Chiapas). Otras anomalías del Modelo 1 incluían “lucha por la tierra en Chiapas”, que también fue significativa en el nivel 0.01, pero de sentido negativo (entre más lucha por la tierra hay, el encuestado se muestra menos comunitarista), y el “conflicto”, que fue estadísticamente significativo en ese mismo nivel de precisión y correlacionado positivamente con el comunitarismo (mientras que en el modelo 3 la causalidad corre en sentido contrario). Estos resultados quizá impliquen que en Chiapas, donde el conflicto social entre grupos está mucho

Cuadro 3

Reporte de Modelos Probit escindidos
(el grupo (*cluster*) individualista es el grupo base o de referencia)

	Modelo 1 Chiapas (N = 1707)			Modelo 2 Oaxaca (N = 1310)			Modelo 3 Los tres estados (N = 4229)		
	Coef.	Error est.	z	Coef.	Error est.	z	Coef.	Error est.	z
<i>Pct indig**</i>	0.691	0.198	3.49	0.030	0.385	0.08	0.248	0.142	1.75
<i>Leng. encuesta**</i>	0.304	0.130	2.33	0.090	0.378	0.24	0.189	0.106	1.78
Indígena	-0.082	0.084	-0.98	-0.223	0.130	-1.71	-0.045	0.062	-0.72
Zapatista de Chiapas	-0.022	0.091	-0.24	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<i>Dispersión étnica</i>	0.046	0.066	0.71	-1.025	0.454	-2.26	0.003	0.026	0.10
<i>Proporción de ejidos**</i>	0.039	0.012	3.17	0.104	0.029	3.64	0.044	0.007	6.14
<i>Cantidad de tierras en propiedad**</i>	-0.115	0.039	-2.92	0.0327	0.079	0.41	-0.053	0.026	-2.06
<i>¿Trabaja en la agricultura?***</i>	-0.201	0.117	-1.71	0.111	0.198	0.56	-0.1544	0.073	-2.11
<i>Lucha por la tierra en Chiapas**</i>	-0.335	0.145	-2.30	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<i>¿Corporativista?***</i>	-0.058	0.054	-1.09	0.118	0.096	1.24	-0.087	0.036	-2.44
<i>Gob. tradicional?***</i>	-1.018	0.061	-16.61	-0.920	0.100	-9.22	-0.858	0.037	-23.49
Oaxaca UC	NA	NA	NA	0.319	0.234	1.36	NA	NA	NA
<i>¿Edu. primaria?</i>	0.103	0.118	0.87	0.079	0.174	0.46	0.011	0.064	0.18
<i>Globalizado**</i>	-0.040	0.038	-1.07	-0.034	0.059	-0.57	-0.043	0.022	-2.00
<i>Población**</i>	0.205	0.032	6.42	0.147	0.075	1.95	0.210	0.020	10.36
Dummy de Chiapas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.010	0.087	0.11
<i>Cambio poblacional?***</i>	-0.294	0.125	-2.35	-0.174	0.374	-0.47	-0.203	0.092	-2.21

Log de probabilidad = -591.2249 Log de probabilidad = -215.5114 Log de probabilidad = -1540.663

Predicción de casos = 85.82% Predicción de casos = 93.97% Predicción de casos = 84.25%

R² de McFadden = 0.386 R² de McFadden = 0.447 R² de McFadden = 0.403

	Modelo 1 Chiapas (N = 1707)		Modelo 2 Oaxaca (N = 1310)		Modelo 3 Los tres estados (N = 4229)				
	Log de probabilidad = -591,2249		Log de probabilidad = -215,5114		Log de probabilidad = -1540,663				
	Predicción de casos = 85,82%		Predicción de casos = 93,97%		Predicción de casos = 84,23%				
	R ² de McFadden = 0,386		R ² de McFadden = 0,447		R ² de McFadden = 0,403				
	Coef.	Error est.	z	Coef.	Error est.	z			
Sexo**	-0.165	0.106	-1.55	-0.120	0.151	-0.80	-0.123	0.062	-2.00
¿Migrante?*	0.010	0.119	0.09	-0.228	0.194	-1.18	-0.131	0.073	-1.80
Pobreza relativa**	-0.203	0.070	-2.92	0.033	0.120	0.28	-0.098	0.048	-2.05
Interacc. electoral**	-0.900	0.783	-1.15	0.544	1.663	0.33	-1.574	0.484	-3.25
Conflicto**	0.114	0.040	2.88	-0.071	0.060	-1.19	-0.078	0.024	-3.32
Dispersión religiosa	0.004	0.106	0.04	-9.006	6.275	-1.44	-0.074	0.085	-0.87
Constante	-0.556	0.465	-1.20	9.652	6.534	1.48	-0.197	0.281	-0.70

Nota: las *cursivas* significan que la variable es estadísticamente significativa en el nivel 0.05; * es significativo en el nivel 0.10; ** es significativo en el nivel 0.01; NA, no se aplica.

más extendido (en comparación con el conflicto dentro de los grupos en Oaxaca) y empapado de un marco de identidad étnica, las personas con más experiencia en la lucha por la tierra echaban mano de este marco comunitarista para alcanzar objetivos más individualistas. Se dan ejemplos en las secciones subsecuentes de este artículo.

Resulta revelador que “zapatista de Chiapas” (es decir, si los encuestados vivían en municipios con presencia zapatista, según la información pública más específica disponible en 1997) no fue estadísticamente significativo como determinante de las actitudes de los encuestados. De manera similar, en el Modelo 2, “Oaxaca UC”, el indicador de si había reconocimiento formal de los usos y costumbres en el municipio de la encuestada, tampoco fue estadísticamente significativo. Como se indica en el Cuadro 3, la variable operacional de gobierno tradicional dentro de la hipótesis de “Capital social” era la de mayor peso, y tenía un signo negativo de contraintuición. Dicho de otro modo, los encuestados de municipios *sin* organizaciones tradicionales de capital social se agrupaban mucho más como comunitaristas. Las prácticas de gobierno tradicional se correlacionaban con los “individualistas”, lo que implicaba que el ímpetu por crear capital social puede tener su motor en individuos fuertes o ser causado por fuertes relaciones con el estado (o reacciones hacia el estado, pero en el marco de éste), más que surgir espontáneamente en comunidades corporativistas cerradas. Esta interpretación es consistente con las afirmaciones según las cuales las comunidades indígenas están reconstruyendo actualmente las sociedades tradicionales en Chiapas (Burguete, 2004; Hernández Castillo, 2002) y en Oaxaca (Chance, 1986; Aquino Moreschi, 2002) para reformar las instituciones tradicionales de acuerdo a la precisión histórica y con el objetivo normativo de promover la identidad cultural indígena.

También se confirmó fuertemente la “Estructura agraria”. En consonancia con las expectativas contraintuitivas, los encuestados de Oaxaca tenían una tendencia *menor* a ser clasificados en el grupo de los colectivistas-comunitaristas cuando se les comparaba con la categoría individualista de referencia. De hecho, era más probable en 8.64% que los encuestados de Oaxaca se agruparan como comunitarios que los que no eran de Oaxaca. El coeficiente de significación de las variables operacionales de “Estructura agraria” en los tres modelos es la relación entre ejidatarios por municipio y tenedores de tierras comunales por municipio. Los encuestados de los municipios con niveles altos de propiedad comunal eran *más* propensos a agruparse como individualistas que los que no tenían tierras comunales. Las explicaciones de estos resultados aparentemente contraintuitivos en cuanto a las instituciones de tenencia de la tierra se pueden entender mejor al dirigir la mirada

por encima de la etiqueta tierra “comunal” o “ejidal”. Para administrar un ejido se requiere tomar las decisiones de manera colectiva, mientras que en las tierras comunales no (Embruz, 2004; Gijón Cernas, 2004; Guzmán Alcántara, 2004; Pérez Gómez, 2004; entrevistas). Cada uno de los titulares que aparecen en el título de propiedad tiene voz y voto en cuanto a lo que se ha de cultivar, cómo se han de repartir las tierras, y si se pueden poner en venta, y a menudo los ejidatarios se ven enfrascados en conflictos para unirse en contra de otros ejidos del mismo municipio y en contra de gobiernos municipales que tienen intereses encontrados. A diferencia de los ejidos, en los que se pueden traslapar varios municipios, las tierras comunales por lo común se apegan a las fronteras políticas de un solo municipio, y establecen la política a seguir mediante un único comisionado municipal para las tierras comunales.¹⁴ El comisionado de las tierras comunales a menudo sólo reparte las parcelas entre familias y personas, quienes las cultivan de manera individual o la compran y venden de manera informal, o incluso formalmente. Además, mientras la lucha para obtener reconocimiento para los ejidos fue larga y violenta, especialmente en Chiapas, el reconocimiento para las tierras comunales sólo requería reconocimiento de tierras que ya estaban en manos de grupos indígenas, algo muy común en Oaxaca, donde con frecuencia ya había títulos de propiedad legales que databan de la época colonial. Quienes querían crear un ejido, normalmente se basaban en derecho *de facto* —por ejemplo, a raíz de una ocupación ilegal— más que en títulos de propiedad *de jure* que presentaban los propietarios de tierras comunales. Otra cosa que también confirma esta hipótesis, es que los encuestados de municipios donde las negociaciones con el estado por los títulos de propiedad se habían dado en años anteriores (sólo para el Modelo 1 de Chiapas) fueron significativamente más individualistas. Si bien esto no verifica de manera directa la hipótesis de que los encuestados de municipios con movilizaciones extensas y pocos asentamientos serían más comunitaristas, sí plantea ciertas preguntas.

Mientras la dispersión de minorías étnicas y religiosas apenas tuvo efecto sobre las clasificaciones de grupos modales, la variable electoral fue estadísticamente significativa y negativa en el modelo de tres estados. Así, los encuestados de bastiones municipales antagónicos al PRI y que tuvieron un alto índice de votación en las elecciones presidenciales del año 2000 tendieron a agruparse como individualistas. Sin embargo, como también fue cierto que

¹⁴Se trata más de un patrón que de una regla estricta. Aproximadamente 91% de los municipios de Chiapas tienen más de un ejido, pero sólo 15% contiene más de una tierra comunal. En Oaxaca, el único estado que tiene más tierras comunales que ejidos, 20% de los municipios tenían más de un ejido, mientras 29% dijo tener más de una tierra comunal (INEGI, 2002).

los campesinos corporativistas resultaron agrupados como individualistas, quizá haya que concluir, con base en los estudios mencionados más arriba sobre el corporativismo en las áreas rurales de México, que los ciudadanos con una interacción intensa con el estado tuvieron actitudes más individualistas. Esto sería consistente con la noción de que los comunitaristas definen las identidades en oposición al estado —los comunitaristas tendieron a votar por el PRI o a tener tasas de abstencionismo más altas—. El signo negativo en la escala del corporativismo estadísticamente significativo (en la hipótesis de “Capital social”) refuerza este vínculo entre tendencias electorales no favorecedoras del PRI y actitudes individualistas, aunque la correlación es de sólo 0.129 entre si un encuestado dado vive en una área de voto de oposición y si votó por cualquier partido que no fuera el PRI en 2000. El sexo del encuestado fue estadísticamente significativo en el nivel 0.10 y negativamente correlacionado con el comunitarismo en el modelo compuesto, pero no en los modelos 1 y 2.

En general, hubo pruebas firmes que impidieron confirmar la mayor parte de los indicadores dentro de la hipótesis “Identidad étnica” (excepto en Chiapas), y que confirmaron con firmeza los de “Estructura agraria” y “Capital social”. El resultado más sorprendente fue que entre mayor era la población que tenía ejidos en relación con los propietarios de tierra comunal en un poblado (ambas cosas medidas como un porcentaje de la población total de los poblados), había más probabilidad de que un encuestado tuviera actitudes comunitaristas. De hecho, los encuestados que resultaron ser más comunitaristas fueron los habitantes rurales de Zacatecas, donde las tierras públicas son mayoritariamente ejidos. Sólo de 20 a 30% de los municipios de Chiapas y Oaxaca tuvieron más de un ejido dentro de sus límites, mientras que en Zacatecas, casi 90% poseen varios ejidos. Es necesario hacer más investigación etnográfica para saber cuáles son las consecuencias de las diferencias en las estructuras de la tenencia de la tierra en el desarrollo político y económico, pero este resultado es muy sugerente.

La limitada importancia de la hipótesis de “Identidad étnica” con relación a las otras da credibilidad a la posibilidad de que la identidad étnica sea objeto de una manipulación parcial, o por lo menos dependiente de los efectos de los indicadores de las otras hipótesis. Los resultados cuantitativos son provocativos, y sugieren líneas de investigación para un seguimiento etnográfico. En primer lugar, si la identidad étnica no está fijada inmutablemente, sino que es fluida o por lo menos hasta cierto punto con posibilidades de ser activada y desactivada, ¿acaso existen demandas sociales que son particulares de los grupos étnicos? En segundo lugar, si las demandas sociales planteadas por los zapatistas y otros movimientos indígenas de Latinoamérica (como los de la

Bolivia de Evo Morales) en verdad son expresiones más universales del desarrollo de clase y económico, ¿de qué manera se las arreglaron los líderes para movilizar a la gente presentándola como “étnica”? Las consecuencias de la importancia de las instituciones de tenencia de la tierra (ejidos *versus* tierras comunales) puede significar que existe una afinidad electiva entre las formas que toma la identidad étnica y entre ya sea los efectos de los ejidos comunitarios, o la solidaridad de movilización del grupo inherente en la creación de ejidos. Las siguientes dos secciones desarrollan con más profundidad el proceso de contestación agraria y el suministro de servicios sociales mediante la asunción, por parte de los líderes indígenas y sus seguidores, de identidades indígenas.

Marcos de contestación agraria en movimiento y el surgimiento del zapatismo

Estos resultados estadísticos corresponden a la historia de predominio de la reforma agraria sobre el conflicto étnico que los chiapanecos fuera del círculo zapatista retratan más allá de la impactante luz de los medios de comunicación. Pedro Díaz Solís, uno de los líderes históricos choles entre los lacandones, de manera sucinta presenta la posición de muchos campesinos cuando dice que mientras muchos colonos choles que no tenían tierras decidieron a principios de los años setenta solicitar títulos de propiedad al gobierno, “los que no [siguieron las vías legales] fueron con los curas, y con el tiempo acabaron convirtiéndose en zapatistas” (Díaz Solís, 2005, entrevista). Para Díaz Solís “el maltrato a los grupos étnicos no era el problema. El problema era otro. El problema era la tierra”.

Toda una gama de grupos de la sociedad civil que encauzaban las demandas del campo surgió en los años setenta y ochenta. La mayor parte de estos grupos fueron cooptados por el sector corporativista campesino del PRI-estado, la Confederación Nacional Campesina (CNC), la cual por ley revisaba y avalaba todos los reclamos de tierras antes de la creación de los tribunales agrarios en 1992 (Hardy, 1984, citado en Trejo, 2004: 133). Pero también surgieron grupos más independientes, como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), una ONG dedicada a los problemas legales de la tierra asociada a los enclaves del PRD en el estado) y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), una ONG dedicada a la tierra que se apoyaba en la movilización y las protestas de invasores de tierras como forma de acción colectiva fuera de la influencia corporativista de la CNC. En la región de Las Cañadas en la Selva Lacandona, la base de apoyo central de los

zapatistas, se decía que cerca de 40% de los insurgentes provenía de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC), el grupo de defensa de la tierra más grande de la Selva Lacandona, el cual siguió contestando el problema de la tierra mediante vías legales al mismo tiempo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se enfrentó al estado con medios extra-legales (Hernández Navarro, 1995: 120).

El aumento de las demandas de tierra en los años sesenta y setenta fue correspondido con más promesas de tierras por parte de la presidencia a fines de los años setenta. Las promesas se hicieron durante los gobiernos de Díaz Ordaz y Echeverría aparentemente en nombre de las raíces populistas de la Revolución Mexicana para responder a los cuestionamientos al gobierno autoritario del país provenientes del extenso movimiento estudiantil de 1968 y de las guerrillas urbanas de los años setenta, al mismo tiempo que el gobierno reprimía estos movimientos. Las organizaciones independientes de Chiapas, que florecían a principios de los ochenta, organizaron cientos de movilizaciones para obtener títulos de propiedad. Según Trejo (2004: 66), de los cientos de protestas en los municipios indígenas de México (aquí se considera que un municipio es indígena cuando por lo menos 10% de la población habla una lengua indígena), en casi la mitad de ellas entre 1975 y 1982, la causa estaba en las demandas de reforma de la tierra; después cayeron a la mitad de este nivel en los años ochenta para enseguida aumentar a los niveles previos en los dos años anteriores a la conclusión oficial de la Reforma Agraria en 1992 antes de dar un pico aun más alto —en todo el país— a raíz del levantamiento zapatista de 1994. La represión gubernamental se dio junto con este aumento de movilizaciones independientes, dado que los reclamos de violación de los derechos humanos también aumentaron (Trejo, 2004; Gómez Cruz y Kovic, 1994; Guillén, 1998).

En respuesta a los esfuerzos por parte de la federación —aunque fueran escasos— para “cumplir” todas las ceremonias de entrega de tierras de los presidentes, el gobierno autoritario de Chiapas, bajo una gran presión de la élite terrateniente que había permanecido en buena medida intacta desde antes del siglo XIX, advirtió tres vacíos institucionales. Primero, el gobierno encontró la manera, mediante el Programa de Rehabilitación Agraria (PRA), de compensar generosamente a los terratenientes que armaban “falsas” invasiones de tierras en las partes menos fértiles de sus terrenos o que no querían conservar, con lo que se deshacían de porciones económicamente onerosas para ellos. Segundo, el gobernador Absalón Castellanos Domínguez, quizá el más corrupto de un grupo bastante malo de los años setenta y ochenta, extendió más certificados de inafectabilidad (2932 agrícolas y 4714 ganaderos), con lo que puso la tierra al abrigo del reparto, que cualquiera de sus antecesores

desde 1934 (Reyes Ramos, 1992: 119). Tercero, el código penal de Chiapas se usó selectivamente para castigar a los campesinos que pedían tierras. Para principios de los años noventa, cerca de 90% de las personas encarceladas en el estado eran campesinos indígenas, aunque este sector sólo correspondía a 30% de la población del estado. Los terratenientes privados acusaban a los campesinos comuneros y ejidatarios de cortar leña (que era ilegal según el código penal). Entonces, los campesinos iban a parar a la cárcel mientras sus procesos legales se alargaban indefinidamente, y mientras los acusadores “se hacían cargo” de las tierras que habían ocupado para cultivarlas (Thibault, 1998: 41). Para contrarrestar estas innovaciones institucionales de las élites regionales de Chiapas en pro del status quo, las declaraciones de derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo, que ganaban influencia en México —y en toda Latinoamérica— durante los años noventa, dieron a los campesinos de Chiapas nuevos medios para enmarcar sus agravios. El fracaso del gobierno federal para controlar los sabotajes de los enclaves de las élites locales a sus tías reformas agrarias, junto con la efervescencia de la movilización social por parte de grupos independientes que por lo demás no eran visibles, sentó las bases para el surgimiento a la luz pública de los zapatistas.

A raíz del levantamiento de 1994, el gobierno mexicano fortaleció a la corporatista CNC, concediendo a la organización priísta campesina cerca de tres cuartas partes de la tierra repartida (Villafuerte *et al.*, 1991: 156, nota 3). La Secretaría de la Reforma Agraria, junto con la Procuraduría de Asuntos Agrarios y la Secretaría de Gobernación de Chiapas, crearon un fondo para “comprar” tierras a los terratenientes privados que tenían propiedades en las áreas ocupadas por los zapatistas en Las Cañadas, dando “indemnizaciones” en dinero en efectivo para ayudar en la reubicación de los propietarios. El reparto de tierras, más intenso entre 1994 y 1996 (pero cuyo proceso vino concluyendo hasta 2005), fue un intento por mitigar las tensiones de manera discreta, entablado negociaciones *ad hoc* con cada grupo de invasores que no cayeran en contradicción con la letra de la “conclusión” oficial de 75 años de reforma agraria en México. Sin embargo, en consonancia con la estrategia de cooptación del PRI, el gobierno dio más tierras a los que apoyaban al estado que a los opositores radicales. La mayor parte de las 240 000 hectáreas que se compraron para repartirlas a los invasores de tierras (Luna Luján, entrevista 2002) se dio a los grupos de campesinos que estaban a favor del régimen¹⁵ (Villafuerte *et al.*, 1999: 195, 196; Ruíz, entrevista 2004), pero aproxima-

¹⁵ Grupos violentos de invasores de guardias blancas también ocuparon extensas propiedades de terratenientes ausentes y, en algunos casos, eran organizados por los propios propietarios para “contra invadir” tierras y así restituir sus derechos de propiedad.

damente 20% de la tierra también se dio a los “invasores” de los nuevos grupos de campesinos que no eran cómplices del corporativismo del estado.

Además, el gobierno estatal neutralizó los aspectos relacionados con la tierra del conflicto zapatista mediante el “préstamo” de 65 000 de los 7.5 millones de hectáreas a los invasores zapatistas (Luna Luján, entrevista 2002). Se ha dicho que la reforma agraria extraoficial realizada por el gobierno estatal desde el levantamiento zapatista contribuyó a mitigar el elemento de reclamo de tierras en el conflicto rural en Chiapas, aunque la presión demográfica, en combinación con el aumento de la población en lo que antes era una válvula de seguridad en la Selva Lacandona para los colonos, sigue viva. Pero los zapatistas efectivamente provocaron la reforma *de facto* de gran escala en Chiapas, que desde 1992 ha realizado el reparto de 300 000 hectáreas, más de las 290 000 que se repartieron en Chiapas durante el apogeo de la reforma agraria del presidente Lázaro Cárdenas a fines de los años treinta (Reyes Ramos, 1992: 133). Además de los remedios aplicados por el gobierno estatal a las demandas de los zapatistas, el gasto social de la federación en Chiapas aumentó radicalmente tras el levantamiento de 1994. Según Villafuerte *et al.* (1999: 373), el gasto social federal prácticamente se duplicó en Chiapas, pasando de 26% del producto interno bruto del estado en 1989, a 42% en 1994. De manera similar, Chiapas recibió más recursos del gobierno federal para el desarrollo rural, de 1.4% en 1991, a 2.3% —en promedio entre 1993 y 1996— (Villafuerte *et al.*, 1999: 374).

El sincretismo zapatista con el estado en el suministro de servicios sociales

El EZLN les dio a los campesinos indígenas de México un nuevo poder para enmarcar y afirmar sus derechos indígenas, pero no parece que haya reconstruido de manera fundamental las añejas identidades comunitarias indígenas. Más bien, les dio a los solicitantes de tierras otra opción aparte de la seguir asumiendo sus papeles asignados por el estado de campesinos corporativistas. La existencia de los zapatistas dio a los ciudadanos la opción de asumir identidades de protesta con respecto a las autoridades estatales y locales, y también la de asumir posiciones híbridas. Tal posición, que discrepa de muchas de las interpretaciones del levantamiento zapatista y sus causas, es consistente con los nuevos teóricos de los movimientos sociales, quienes han puesto su atención en los marcos ideológicos y las oportunidades políticas fuera de las posiciones y acciones de los líderes de los movimientos. Las evidencias estadísticas y etnográficas implican que los zapatistas trataron de reorientar públicamente

los agravios, de ser asuntos de la clase agraria a ser los de la identidad étnica, incluso al mismo tiempo que concretamente trataban de corregir estos problemas de clase económica en el reparto de tierras.

Por todo el estado de Chiapas, los antiguos —incluso los que todavía lo son— seguidores de los zapatistas, por lo menos están parcialmente regresando a la práctica de recurrir al estado para obtener algunos servicios. Esto está creando conflictos en áreas como la educación entre los ideólogos puristas del movimiento, quienes insisten en no recibir apoyo alguno del gobierno, y los pragmáticos, quienes quieren mantener el movimiento pero sin tanto sacrificio. Según Burguete (2004: 174-175): “[E]l EZLN rechaza cualquier tipo de relación entre los programas educativos rebeldes, con los del gobierno (...). [Pero] muchas de las familias zapatistas han aceptado negociaciones con las instituciones de gobierno en materia de educación, lo que constituye un punto de tensión en las filas de los rebeldes y a veces motivo de ruptura [entre los zapatistas y algunos de sus seguidores]”. Tales conflictos de intereses, como los que hay entre los padres que quieren asegurarse de que sus hijos reciban una educación reconocida por el estado y los líderes zapatistas, quienes aparentemente quieren mantener la pureza, disciplina y coherencia de su movimiento, se han vuelto cada vez más comunes a medida que el movimiento del EZLN se transformó a mediados de los años noventa, pasando de una guerra de guerrillas de baja intensidad a un estancamiento que dura ya diez años.

En lugar de simplemente negarse a pagar la luz al monopolio de estado que les impone la tarifa que quiere, los consumidores pueden apelar al zapatismo y ser parte de un movimiento más amplio y que ideológicamente es más creíble. De hecho, los motivos de estos zapatistas simulados —ciudadanos que buscan espacio para la contestación mediante la invocación de insurgencia— eran muy distintos de los “fraudes” zapatistas de mediados de los años noventa, que no participaban activamente con el grupo pero se apropiaban de los símbolos zapatistas para propagar el miedo a la asociación y el espectro de una amenaza organizada mucho más grande de lo que se pensaba. Por supuesto, los nuevos zapatistas también tenían otra ventaja concreta, que era que al declarar sus lealtades, se protegían de ser perseguidos gracias a la ley federal de la Cocopa de 1996 y gozaban del derecho a la protección política.

Parecía que alguna combinación de la pureza ideológica del movimiento y la protección física que ofrecía lo impulsó a asumir una forma descentralizada y personalizada para el siglo XXI. En el municipio de San Andrés Larraínzar, por ejemplo, hay dos gobiernos paralelos, uno administrado por los zapatistas y otro por el PRD. Los perredistas controlan el registro civil, dado que muchos zapatistas ni siquiera levantan actas de nacimiento. Los zapatistas

controlan el autobús del pueblo y tienen en sus manos la escuela, aunque las autoridades describen las relaciones entre ellos como civilizadas (por ejemplo, los zapatistas permiten que las autoridades electas usen el autobús, y éstas dejan que los zapatistas recojan su correo y otros recursos que les llegan por medio de la alcaldía). Las autoridades de los gobiernos estatal y federal dejan que haya varias autoridades porque, en Larráinzar y Aldama, la coexistencia les ha permitido a los dos bandos “guardar las apariencias” y evitar un recrudecimiento del conflicto.

Conclusiones

Los participantes en una encuesta en Chiapas mostraron opiniones más comunitarias que los de Oaxaca, y aunque gran parte de las diferencias se explican por las variables socioeconómicas, mucho se explica también sabiendo si los encuestados viven en áreas rurales o si las instituciones dominantes de tenencia de la tierra son los ejidos comunitarios creados por el estado de Chiapas, o las tierras comunales más “individualistas” de Oaxaca. Marcadas diferencias de actitud entre los individualistas y los comunitaristas tradicionales se identificaron cuando los grupos de actitudes latentes se construyeron, pero las distinciones entre actitudes no correspondieron a una división entre mexicanos indígenas y no indígenas.

El artículo estudió los orígenes de la acción colectiva de manera diferente, especificando las actitudes de las personas y enseguida especulando acerca de su agregación a los movimientos sociales, más que infringiendo las actitudes e incentivos individuales de los logros de los grupos, como lo hace la mayor parte de los estudios. Este procedimiento arroja resultados distintos de las explicaciones que ponen en el centro a los líderes, pero sus resultados se pueden interpretar fácilmente para explicar de qué manera la defensa de la autonomía indígena pudo haber provocado una reforma agraria, y cómo el discurso en contra del estado pudo haber tenido un peso específico para oponerse al estado y obligarlo a mejorar la provisión de servicios sociales. De hecho, durante el periodo de 2002 a 2003, cuando se realizó el estudio, el comunitarismo zapatista *no* daba un reflejo claro de las actitudes de la mayor parte de los encuestados indígenas de Chiapas. Con base en mis resultados, puedo inferir que quizá la actitud “media” de los indígenas de Chiapas esté más orientada hacia los derechos individuales que de lo que se había pensado en los estudios académicos, debates políticos y las imágenes de los medios de comunicación, lo que sugiere que hay una discrepancia considerable entre las opiniones de los encuestados indígenas (ya sean espectadores silenciosos,

vividores (*free riders*), o pro- o anti-zapatistas), y los líderes que defienden los derechos comunitarios que hablan en su nombre.

Lo que queda por responder para la investigación subsecuente en México, y los estudios comparativos que se están llevando a cabo en los Andes sudamericanos (Urioste y Pacheco, en Zoomers y Van der Har, 2000) y en África subsahariana (Boone, 2005; Onoma, 2006) es explorar los efectos de los sistemas de tenencia de la tierra sobre las actitudes políticas individuales y de grupo. Específicamente, ¿la fuerte correlación entre actitudes comunitaristas y las instituciones de tenencia de la tierra en Chiapas, y quizá en otras sociedades agrarias, es causada por los efectos de las instituciones agrarias (en este caso los ejidos), o por las solidaridades de grupo que se desarrollan dentro de los movimientos campesinos en la lucha política de décadas que precedió al levantamiento zapatista? En cualquier caso, la experiencia de Chiapas muestra que los modelos centrados en los líderes de los movimientos o en los objetivos expresados explícitamente por los movimientos son demasiado simplificadores, y que la extensa influencia del estado, especialmente en el campo empobrecido, debe ser tomada en cuenta en los modelos académicos y en los movimientos sociales que pretenden explicar. Por ahora, este artículo ha demostrado, mediante el análisis estadístico y etnográfico, que si bien los ciudadanos indígenas usan las instituciones sociales y políticas estatales y “tradicionales” para resolver sus problemas, lo hacen de manera pragmática, más que por tener una predisposición ideológica fuerte cualquiera para “mirar hacia adentro” en las comunidades corporativistas —como lo afirman los antropólogos de la vieja escuela y los zapatistas de los “nuevos medios”—.

Traducción del inglés de Germán Franco

Recibido: enero, 2009

Revisado: mayo, 2009

Correspondencia: American University/School of Public Affairs–Government/
Ward-213/4400 Massachusetts Ave, NW/Washington, DC 20016-8130/correo
electrónico: eisensta@american.edu

Bibliografía

Aquino Moreschi, Alejandra (2002), *Acción colectiva, autonomía y conflicto: la reinvencción de la identidad entre los zapotecas de la Sierra Juárez*, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, tesis de maestría.

- Benjamin, Thomas (1996), *A Rich Land – A Poor People: Politics and Society in Modern Chiapas*, edición revisada, Albuquerque, University of New Mexico Press.
- Boone, Catherine (2005), “Property and Political Development: Land Tenure Reform and the Future of the African State”, ponencia presentada en la Annual Meeting of the American Political Science Association (Washington, D.C.), inédito.
- Bourdieu, Pierre (1986), “The Forms of Capital”, en John Richardson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, Nueva York, Greenwood Press, pp. 241-258.
- Burguete Cal y Mayor, Araceli (2004), “Desplazando al Estado: la política social zapatista”, en Maya Lorena Pérez Ruiz (ed.), *Tejiendo historias. Tierra, género, y poder en Chiapas*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 143-187.
- CEDEMUN (2003), Sistema Nacional de Información Municipal, versión 7. Obtenido de www.inafed.gob.mx el 30 de septiembre de 2008. Proviene del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, antes conocido como Centro Nacional de Desarrollo Municipal (CEDEMUN).
- Chance, John K. (1986), “Colonial Ethnohistory of Oaxaca”, en Ronald Spores (ed.), *Supplement to the Handbook of Middle American Indians*, vol. 4, Austin (Texas), University of Texas Press, pp. 165-189.
- Chandra, Kanchan (2004), *Why Ethnic Parties Succeed: Patronage and Ethnic Head Counts in India*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Collier, George A. y Elizabeth Lowery Quaratiello (2005), *Basta! Land and the Zapatista Rebellion in Chiapas*, 3rd ed., Oakland, Food First Books, Institute for Food and Development Policy.
- Cress, Daniel M. y David A. Snow (2000), “The Outcomes of Homeless Mobilization: The Influence of Organization, Disruption, Political Mediation, and Framing”, *American Journal of Sociology*, vol. 105, enero, pp. 1063-1104.
- De Vos, Jan (2002), *Una tierra para sembrar sueños. Historia reciente de la Selva Lacandona, 1950-2000*, México, Fondo de Cultura Económica/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
- Dennis, Philip A. (1987), *Intervillage Conflict in Oaxaca*, New Brunswick, Rutgers University Press.
- Díaz Montes, Fausto (1992), *Los municipios: la lucha por el poder local en Oaxaca*, Oaxaca, Instituto de Investigaciones Sociales-UABJO/Gobierno del Estado de Oaxaca.
- Díaz Polanco, Héctor (2003), *Autonomía regional. La autodeterminación de los pueblos indios*, México, Siglo Veintiuno Editores.
- Díaz Solís, Pedro (2005), Entrevista en la Zona Comunal Lacandona, poblado en el municipio de Ocosingo, Chiapas, 26 de septiembre.
- Eisenstadt, Todd A. (2007), “Usos y Costumbres and Post-Electoral Conflicts in Oaxaca, Mexico, 1995-2004: An Empirical and Normative Assessment”, *Latin American Research Review*, vol. 42, núm. 1, febrero, pp. 52-77.
- (2004), *Courting Democracy in Mexico: Party Strategies and Electoral Institutions*, Nueva York, Cambridge University Press.

- Embruz, Arnolfo (2004), Entrevista con el director de investigación de la Comisión de Derechos Indígenas (CDI), 15 de julio.
- Escárzaga, Fabiola y Raquel Gutiérrez (eds.) (2005), *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, Puebla, Benemérita Universidad de Puebla.
- Fearon, James y David Laitin (2003), "Ethnicity, Insurgency, and Civil War", *American Political Science Review*, vol. 97, núm. 1, pp. 75-90.
- (1996), "Explaining Interethnic Cooperation", *American Political Science Review*, vol. 90, diciembre, pp. 715-735.
- Foro Nacional Indígena (1996), "Comunidad y Autonomía: Derechos Indígenas", versión mecanografiada.
- Geertz, Clifford (1973), *The Interpretation of Cultures*, Nueva York, Basic Books.
- Gibson, Edward (2006), "Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Democratic Countries", *World Politics*, vol. 58, octubre, pp. 101-132.
- Gijón Cernas, Mauricio (2004), Entrevista con el delegado de Oaxaca del Registro Público de la Propiedad Agraria, ciudad de Oaxaca, Oaxaca, 23 de julio.
- Gómez Cruz, Patricia Jovita y Christina María Kovic (1994), *Con un pueblo vivo, en tierra negada. Un ensayo sobre los derechos humanos y el conflicto agrario en Chiapas, 1989-1993*, San Cristóbal de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
- Greenberg, James B. (1989), *Blood Ties: Life and Violence in Rural Mexico*, Tucson, University of Arizona Press.
- Guillén, Diana (1998), *Chiapas 1973-1993. Mediaciones, Política, e Institucionalidad*, México, Instituto Mora.
- Guzmán Alcántara, Armando (2004), Entrevista con el delegado de Oaxaca de la Comisión Nacional de Derechos Indígenas (CDI), Oaxaca, Oaxaca, 17 de julio.
- Hansen, Roger D. (1971), *The Politics of Mexican Development*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.
- Hardin, Russell (1995), *One for All: The Logic of Group Conflict*, Princeton, Princeton University Press.
- Hardy, Clarisa (1984), *El estado y los campesinos: La Confederación Nacional Campesina (CNC)*, México, Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM)/Editorial Nueva Imagen.
- Harvey, Neil (1998), *The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and Democracy*, Durham (Carolina del Norte), Duke University Press.
- Hernández Castillo, Aída (2002), "National Law and Indigenous Customary Law: The Struggle for Justice of Indigenous Women of Chiapas", en Maxine Molyneux y Shahra Razavi (eds.), *Gender, Justice, Development and Rights*, Oxford, Oxford University Press, pp. 384-413.
- Hernández Navarro, Luis (1995), *Chiapas: La Guerra y La Paz*, México, ADN Editores.
- IFE (Instituto Federal Electoral) (2004), *Atlas electoral federal de México, 1991-2003*, México, Instituto Federal Electoral.

- Inclán, María (2006), "From ¡Ya Basta! to the Zapatour: Zapatista Protest Mobilization under Transitional Conditions", inédito.
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2002), *XII Censo General de Población y Vivienda 2000 - Sistema para la Consulta de Información Censal*, México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. CD-ROM.
- (2001a), *XII Censo General de Población y Vivienda 2000 - Principales Resultados (por municipio y localidad)*, México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. CD-ROM.
- (2001b), "Resultados del VIII censo ejidal" (generación de datos en línea), México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, fecha de consulta 10 de enero de 2006 en http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/coesme/programas/rel_biblio.asp
- Inglehart, Ronald y Wayne E. Baker (2000), "Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values", *American Sociological Review*, vol. 65, núm. 1, febrero, pp. 19-51.
- Jackson, Jean E. y Kay B. Warren (2005), "Indigenous Movements in Latin America, 1992-2004: Controversies, Ironies, New Directions", *Annual Review of Anthropology*, vol. 34, pp. 349-573.
- Laitin, David (1985), "Hegemony and Religious Conflict: British Imperial Control and Political Cleavages in Yorubaland", en Peter B. Evans, Deitrich Rueschemeyer y Theda Skocpol (eds.), *Bringing the State Back In*, Nueva York, Cambridge University Press, pp. 285-316.
- León Pasquel, Lourdes de (ed.) (2001), *Costumbres, leyes y movimiento indio en Oaxaca y Chiapas*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)/Miguel Ángel Porrúa.
- Lichbach, Mark (1994), "Rethinking Rationality and Rebellion: Theories of Collective Action and Problems of Collective Dissent", *Rationality and Society*, vol. 6, enero, pp. 10-20.
- Luna Luján, C. Jorge Arturo (2002), Entrevista con el subsecretario de Gobierno del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 7 de noviembre.
- Marshall, T. H. (ed.) (1973), *Class, Citizenship, and Social Development - Essays by T.H. Marshall*, Westport (Connecticut), Greenwood Press.
- Mattiace, Shannan L. (2003), *To See with Two Eyes: Peasant Activism and Indian Autonomy in Chiapas, Mexico*, Albuquerque, University of New Mexico Press.
- McAdam, Doug et al. (eds.) (1996), *Comparative Perspectives on Social Movements*, Nueva York, Cambridge University Press.
- McCammon, Holly J. (2001), "Stirring Up Suffrage Sentiment: the Emergence of the State Woman Suffrage Organizations, 1866-1914", *Social Forces*, vol. 80, núm. 2, pp. 449-480.
- Molinar, Juan (1991), "Counting the Number of Parties: An Alternative Index", *The American Political Science Review*, vol. 85, núm. 4, diciembre, pp. 1383-1381.
- Monroy, Mario B. (ed.) (1994), *Pensar Chiapas, Repensar México*, México, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia.
- Onoma, Ato (2006), *Securing Property Rights in Land: Politics on the Land Frontier*

- in Postcolonial Africa*, Evanston (Illinois), Northwestern University, tesis de doctorado.
- Pérez Gómez, Marcos (2004), Entrevista con el ex comisionado de la propiedad comunal en Chalchihuitán, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 1° de agosto.
- Posner, Daniel N. (2003), "The Colonial Origins of Ethnic Cleavages: The Case of Linguistic Divisions in Zambia", *Comparative Politics*, vol. 35, núm. 2, enero, pp. 127-146.
- Reyes Ramos, María Eugenia (1992), *El Reparto de Tierras y la Política Agraria en Chiapas, 1914-1988*, México, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Reyna, José Luis y Richard S. Weinert (eds.) (1977), *Authoritarianism in Mexico*, Filadelfia, Institute for the Study of Human Issues.
- Ruiz, Margarito (2004), Entrevista con el delgado de Chiapas de la Comisión Nacional de Derechos Indígenas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 28 de julio.
- Rus, Jan (1994), "The 'Comunidad Revolucionaria Institucional': The Subversion of Native Government in Highland Chiapas, 1936-1968", en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (eds.), *Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico*, Durham (Carolina del Norte), Duke University Press, pp. 265-300.
- Rus, Jan, Rosalía Aida Hernández Castillo y Sanan L. Mattiace (eds.) (2003), *Mayan Lives, Mayan Utopias: The Indigenous Peoples of Chiapas and the Zapatista Rebellion*, Lanham (Maryland), Rowman & Littlefield.
- Stephen, Lynn (2002), *Zapata Lives! Histories and Cultural Politics in Southern Mexico*, Berkeley, University of California Press.
- Tarrow, Sydney (1998), *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, 2a. ed., Nueva York, Cambridge University Press.
- Thibault, Simon (1998), *The Zapatista Uprising*, Ottawa, Norman Paterson School of International Affairs, Carleton University, tesis de maestría.
- Trejo, Guillermo (2004), *Indigenous Insurgency: Protest, Rebellion, and the Politicization of Ethnicity in 20th Century Mexico*, Chicago, University of Chicago, tesis de doctorado.
- Villafuerte Solís, Daniel *et al.* (eds.) (1999), *La Tierra en Chiapas-Viejos problemas nuevos*, México, Plaza y Valdés Editores.
- Whittier, Nancy (2002), "Meaning and Structure in Social Movements", en David S. Meyer *et al.* (eds.), *Social Movements: Identity, Culture, and the State*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 289-308.
- Wolf, Eric (1957), "Closed Corporate Peasant Communities in Mesoamerica and Central Java", reimpresión, en R. A. Manners (ed.), *Theory in Anthropology*, Chicago, Aldine, 1968, pp. 294-300.
- Zald, Mayer N. (1996), "Culture Ideology and Strategic Framing", en Doug McAdam *et al.* (eds.), *Comparative Perspectives on Social Movements*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 261-274.
- Zoomers, Annelies y Gemma van der Haar (eds.) (2000), *Current Land Policy in Latin America: Regulating Land Tenure under Neo-Liberalism*, Amsterdam, Royal Tropical Institute.

Apéndice

Estadísticas descriptivas de las variables independientes
(Muestra de 4 229 casos, excepto donde se indique otra cosa)

<i>Variable</i>	<i>Media</i>	<i>Desv. estándar</i>	<i>Mínimo</i>	<i>Máximo</i>
<i>VD ¿Comunitarista?</i>	0.2991	0.4579	0	1
Hipótesis 1: Entidad étnica				
Pct Indíg. (municipal)	0.3793	0.4199	0	1
Leng. encuesta	0.2225	0.4160	0	1
Indígena (individual)	0.6356	0.7765	0	2
Hipótesis 2: Estructura agraria				
Proporción de ejidos	0.9804	5.6766	-9.4665	8.0946
Cantidad de tierras en propiedad	1.0690	1.2370	0	3
¿Trabaja en la agricultura?	0.4363	0.4960	0	1
Dummy de Chiapas	0.4063	0.4907	0	1
¿Corporativista?	0.9764	0.8786	0	3
Zapatista de Chiapas (Chiapas)	0.2999	0.4583	0	1
Lucha por la tierra en Chiapas (Chiapas)	0.1849	0.3883	0	1
Hipótesis 3: Capital social				
Gob. tradicional	1.5583	0.9796	0	3
Globalizado	2.1863	1.5318	0	6
¿Edu. primaria?	0.2977	0.4573	0	1
Oaxaca UC (Oaxaca)	0.5300	0.4990	0	1
Variables de control				
Población (n log)	7.8525	1.9755	3.9512	12.9589
Cambio poblacional	0.0706	0.3920	-3.92105	0.8098
Sexo	1.4994	0.5001	1	2
¿Migrante?	0.1896	0.3921	0	1
Pobreza relativa	0.4077	0.6508	-2.7367	3
Interacción electoral	0.2511	0.0935	0.0334	0.4594
Conflicto	1.2285	1.1882	0	6.5
Dispersión religiosa	1.2189	0.4124	1.0000	2.8907
Dispersión étnica	1.4567	1.1267	0	6

Derivación de las variables independientes

PROPORCIÓN DE EJIDOS (lnratioe) - Es la transformación logarítmica natural del porcentaje de la población a nivel municipal que es habitante de un ejido, dividida por el porcentaje de los que son propietarios de tierras comunales (denominadores de 0 se convierten en 0.001) tomado del censo agrícola (INEGI, 2001b).

CANTIDAD DE TIERRAS EN PROPIEDAD (landweal) - Se trata de una escala de dos puntos que mide la cantidad de tierras en propiedad que corresponde a un encuestado, otorgando un punto por cada uno de los siguientes casos: 1) si el encuestado es dueño de alguna tierra, 2) si esta tierra tiene “parcelas” para el autoconsumo, y 3) si esta tierra tiene “parcelas” para venta en el mercado.

¿TRABAJA EN LA AGRICULTURA? (agricult) - Variable dummy que da el valor de 1 si el encuestado trabaja en el sector agrícola y 0 si trabaja en cualquier otro sector.

POBLACIÓN (lnpop) - Es una transformación logarítmica natural de la población municipal según el censo del año 2000 (INEGI, 2001a).

CAMBIO POBLACIONAL - El porcentaje de cambio en la población de los poblados o asentamientos sub-municipales entre 1990 y 2000 (INEGI, 2001a; CEDEMUN, 2003).

SEXO - Variable dummy que equivale a 2 si la encuestada es mujer y 1 si es hombre.

¿MIGRANTE? - Variable dummy que da el valor de 1 si el encuestado emigró y regresó en los últimos cinco años, y 0 cuando no.

¿EDU. PRIMARIA? - Variable dummy igual a 1 cuando el encuestado tiene primaria terminada y 0 cuando no.

POBREZA RELATIVA - Los tres indicadores que comprendían los índices por persona y por localidad eran la disposición de: 1) energía eléctrica; 2) drenaje; 3) gas (en lugar de leña) para cocinar. Los encuestados que disponían de los tres recursos entraban en una escala de pobreza de 3; los que no tenían ninguno entraban en una escala de pobreza de 0. Si la pobreza relativa más baja daba

3, significaba que el encuestado disponía de los tres recursos, mientras que el miembro típico de su localidad no disponía de ninguna. El nivel más alto de pobreza fue -2.737 , que significa que el encuestado no disponía de ninguno de los recursos, pero la mayor parte de los miembros de su comunidad disponían de los tres (INEGI, 2001a; INEGI, 2002).

INTERACCIÓN ELECTORAL - Porcentaje promedio de votos dados a candidatos que no eran del PRI (medidos a nivel municipal) en las elecciones intermedias de 1997 y 2003, multiplicados por la tasa de participación media entre las dos elecciones federales medidas a nivel municipal (IFE, 2004).

DUMMY DE CHIAPAS - Variable dummy igual a 1 si la encuestada era de Chiapas y 0 si no.

DUMMY DE OAXACA - Variable dummy igual a 1 si la encuestada era de Oaxaca y 0 si no.

GLOBALIZADO - Los niveles de globalización se midieron con una escala de "Conciencia del exterior" de seis preguntas (alfa = 0.589). Las preguntas de esta escala preguntaban si los encuestados alguna vez habían vivido en otra comunidad, si habían estado en la ciudad de México, si habían vivido en otro país, y si sabían qué era el mundial de fútbol, los envíos de dinero (remesas) y la biodiversidad.

CONFLICTO - Esta variable se construyó sumando dos componentes: 1) una escala de conflicto de cuatro elementos (alfa = 0.552) elaborada a partir de las respuestas individuales, en la que se da un punto para cada uno de los casos en que los encuestados han sufrido conflictos religiosos, de gobernabilidad en el municipio, con los partidos políticos o de recursos/ambientales; y 2) una medida promedio de gravedad del conflicto post-electoral municipal (codificado de 0 a 3) durante los cuatro ciclos electorales entre 1989 y 2003 (que resultó ser un sustituto útil para otros tipos de conflictos sociales y políticos, como se ve en Eisenstadt, 2004: 130-162).

GOB. TRADICIONAL - Escala de tres puntos que mide la apreciación del encuestado(a) del grado de organización tradicional de su comunidad, dando un punto para cada uno de los siguientes rubros: un punto si la fiesta anual de la comunidad la organiza un mayordomo; un punto si hay la costumbre de trabajo "voluntario" obligatorio (trabajo comunitario, conocido en Oaxaca como tequio y en Chiapas como faena); un punto si para que alguien pueda aspirar

a ser alcalde se necesita haber ocupado un cargo menor en el servicio público voluntario.

DISPERSIÓN RELIGIOSA - Medida de la dispersión religiosa para evaluar “el número real de religiones” aparte de la mayoritaria (el catolicismo), la cual es profesada por 79% de los encuestados. La fórmula se desprende del Índice Molinar (Molinar, 1991) para medir el número real de partidos políticos.

¿CORPORATIVISTA? - Escala de tres puntos que mide el nivel de corporativismo del encuestado, dando un punto por cada uno de los siguientes artículos: 1) si es miembro de un grupo corporativista del estado; 2) si recibe ayuda de un programa de asistencia social del estado; 3) si votó por el PRI en las elecciones históricas del año 2000.

PCT INDÍG. - Porcentaje de hablantes de lenguas indígenas por población o comunidad sub-municipal, según el censo de 2000 (INEGI, 2001a; INEGI, 2002).

LENG. ENCUESTA - Variable dummy igual a 1 si la encuesta se realizó en lenguas que no sean el español e igual a 0 si se realizó en español.

INDÍGENA - Escala de dos puntos que mide el nivel de identidad indígena del encuestado(a), dando un punto por cada uno de los siguientes artículos: 1) si los encuestados se consideraban a sí mismos principalmente mexicanos, o chiapanecos/oaxaqueños/zacatecanos, o “parte de un grupo indígena” (los que respondieron que parte de un grupo indígena tuvieron un punto, a los demás se les puso 0), y 2) si el encuestado(a) hablaba una lengua indígena.

DISPERSIÓN ÉTNICA - Medida de la dispersión del grupo étnico para evaluar “el número real de etnias” aparte de la minoría étnica más grande de una localidad dada. La fórmula se desprende del Índice Molinar (Molinar, 1991) para medir el número real de partidos políticos.

ZAPATISTA DE CHIAPAS - Variable dummy igual a 1 cuando el encuestado era de una de las 23 comunidades identificadas anteriormente como comunidades autónomas zapatistas en 1997, igual a 0 cuando no. Los municipios entre los mencionados que tenían comunidades pro zapatistas son: Bochil, San Pedro Chenalhó, Chilón, El Bosque, Huitiupán, San Andrés Larráinzar, Las Margaritas, Ocosingo, Pantelhó, Salto del Agua, y Tila. Benemérito de las Américas, fundado antes del año 2000 cerca de la frontera sudeste de Ocosingo, también se contó como un municipio con alguna presencia zapatista.

LUCHA POR LA TIERRA EN CHIAPAS - Variable dummy igual a 1 si la encuestada(o) vivía en alguno de los 27 municipios donde repartos de tierras para resolver conflictos beneficiaron a más de 500 personas entre 1994 y 1998 (Villa-fuerte *et al.*, 1999: 370-372).

OAXACA UC - Variable dummy que es positiva para los que son de alguno de los 418 municipios de Oaxaca (de un total de 570) que legalizaron el sistema de usos y costumbres para realizar elecciones, y no por voto secreto, en 1995.